

# RESUMEN GACETARIO

N° 4456

Fuente: Gaceta Digital de la Imprenta Nacional

**Gaceta N° 140 Miércoles 31/07/2024**

## LA GACETA

[Gaceta con Firma digital](#) (ctrl+clic)

## FE DE ERRATAS

- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

### AVISOS

#### COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

El Colegio de Cirujanos y Cirujanas Dentistas de Costa Rica, aclara que por error en *La Gaceta* N° 121 del 3 de julio del 2024, fueron publicadas las reformas al Reglamento para Asambleas Virtuales y Deliberaciones del Colegio de Dentistas aprobadas en la Asamblea General del 19 de junio del 2024, pero el Reglamento de Asambleas Virtuales y Deliberaciones aprobado en la Asamblea General del 29 de julio del 2021 fue publicado de forma posterior, en *La Gaceta* N° 129 del 15 de julio del 2024. Dado lo anterior téngase por incorporadas las modificaciones a la norma en cuestión tal y como fueron publicadas en *La Gaceta* N° 121 del 3 de julio de 2024. — Dra. Irene Thorpe Booth, Secretaria Junta Directiva. — 1 vez. — (IN2024883988).

## PODER LEGISLATIVO

### NO SE PUBLICAN LEYES

## PODER EJECUTIVO

### ACUERDOS

- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

#### ACUERDO N° 532-P

NOMBRAR A LA SEÑORA MARCELLE CRISTINA ROMERO MONGE, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL SECTOR FORMADO POR LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES U ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD.

- MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
- MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA

## DOCUMENTOS VARIOS

- JUSTICIA Y PAZ

### COMERCIO EXTERIOR

#### CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE REMANENTES DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN 2024

El detalle de los remanentes disponibles, así como el formulario correspondiente y la normativa aplicable para su asignación, se encuentra disponible en el siguiente vínculo: [www.comex.go.cr/contingentes](http://www.comex.go.cr/contingentes).

Para más información, sírvase escribir al correo: [agricultura\\_contingentes@comex.go.cr](mailto:agricultura_contingentes@comex.go.cr). — Adriana Castro Gutiérrez, Directora General de Comercio Exterior. — 1 vez. — O. C. N° 082202400270. — Solicitud N° 519813. — (IN2024876813).

- AMBIENTE Y ENERGIA

## TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

- AVISOS

## CONTRATACION PUBLICA

- LICITACIONES

## REGLAMENTOS

### BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS Y COMISIONES DEL CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

### CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

APROBÓ LA REFORMA AL REGLAMENTO QUE REGULA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DE PAGO POR DEUDAS DE PATRONOS Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

### CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)

### MUNICIPALIDADES

## **MUNICIPALIDAD DE POÁS**

ADICIÓN AL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN DE POÁS

REGLAMENTO DE INVASIÓN DE DERECHO DE VÍA DE CAMINOS PÚBLICOS CANTONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS

## **MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS**

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

## **MUNICIPALIDAD DE CARTAGO**

“REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES AL ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LAS PERSONAS COLABORADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO Y SU RÉGIMEN DISCIPLINARIO”

## **MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO**

SE APRUEBA Y ADOPTA PARA SU APLICACIÓN EL NUEVO REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE GARANTÍAS Y CAUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO

## **MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**

REFORMA AL ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO PARA LICENCIAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

PROPUESTA DE REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LOS DECOMISOS MERCADERÍA POR VENTA EN LA VÍA PÚBLICA, Y ZONA PÚBLICA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE SIN CONTAR CON LICENCIA O PATENTE RESPECTIVA EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ

## **INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS**

- [UNIVERSIDAD DE COSTA RICA](#)
- [PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA](#)

## **REGIMEN MUNICIPAL**

- [MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI](#)
- [MUNICIPALIDAD DE QUEPOS](#)

## **AVISOS**

- [CONVOCATORIAS](#)
- [AVISOS](#)

## NOTIFICACIONES

- JUSTICIA Y PAZ
- MUNICIPALIDADES

### ***BOLETÍN JUDICIAL N° 140 DEL 31 DE JULIO DE 2024***

**Boletín Judicial** (ctrl+clic)

(Consultado de la página oficial del [Poder Judicial-Tomado del Nexus.PJ](#))

#### **ÁMBITO ADMINISTRATIVO**

##### **CIRCULARES CORTE PLENA/ CONSEJO SUPERIOR**

###### **CIRCULAR No. 155-2024**

ASUNTO: IMPEDIMENTO PARA CONVOCAR A VÍCTIMAS Y PERSONAS OFENSORAS A NEGOCIAR O CONCILIAR EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL.

###### **CIRCULAR No. 157-2024**

ASUNTO: COMUNICACIÓN DEL “PROTOCOLO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS CON GOCE DE SALARIO PARA QUE PERSONAS SERVIDORAS JUDICIALES QUE PERTENEZCAN A ENTIDADES O GREMIOS, ASISTAN A ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE ÉSTAS”.

###### **CIRCULAR No. 154-2024**

ASUNTO: “RECORDATORIO SOBRE EL REBAJO EN LA PLANILLA DE CUALQUIER ADELANTO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES QUE HAGA EL PODER JUDICIAL.”

###### **CIRCULAR N° 153-2024**

ASUNTO: CONVENIO N°14-2017 PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL (PSI) PARA EL SECTOR PÚBLICO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y EL PODER JUDICIAL

#### **AVISO CONSTITUCIONAL 3V**

Publicar TRES VECES CONSECUTIVAS en el Boletín Judicial, tal y como lo estipula el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

“De conformidad con lo establecido en el oficio No.2239-DE-2024 de 27 de junio de 2024 de la Dirección Ejecutiva, que establece que las publicaciones remitidas por la Sala Constitucional por medio del Sistema de Boletín Judicial (SIBO), se tramiten con las consideraciones expuestas en el oficio No. PSC-038-2024 del 25 de junio de 2024 de la Presidencia de la Sala Constitucional”

**SALA CONSTITUCIONAL**

Asunto: Acción de Inconstitucionalidad  
A Los Tribunales y Autoridades de la República  
HACE SABER:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 24-0117640007-CO que promueve COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS NARANJO SRL, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del veintitrés de julio de dos mil veinticuatro. /Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por JOSÉ LUIS NARANJO VALVERDE, cédula de identidad nro. 1-0822-0788, en su condición de representante legal de COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS NARANJO SRL., cédula de persona jurídica nro. 3-102-683380, para que se declare inconstitucional el artículo 103, inciso e), del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por estimarlo contrario a los principios constitucionales del non bis in idem y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y al DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN. El artículo 103, inciso e), del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) se impugna en cuanto a su aplicación conjunta con otras sanciones establecidas en ese mismo cuerpo normativo, como es el caso de las previstas en su ordinal 81. La norma impugnada establece que: “La Administración Tributaria está facultada para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los medios y procedimientos legales. A ese efecto, dicha Administración queda específicamente autorizada para: (...) e) Establecer, mediante resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, por lo menos con un mes de anticipación a su vigencia, topes a la deducibilidad de los gastos y costos que se paguen en efectivo, de manera que ningún gasto o costo mayor a tres salarios base sea deducible del impuesto general sobre la renta si su pago, en el momento en que se realice, no está respaldado con un registro bancario de tal transacción. La Administración Tributaria establecerá, vía resolución general, las excepciones a tales limitaciones.” Señala que tal norma contiene una sanción impropia y cuando se aplica al mismo hecho o situación tributaria, de manera conjunta con otras sanciones previstas en el CNPT (artículo 81), esto implica una violación del principio del non bis in idem y, consecuentemente, del principio de proporcionalidad. Aduce que el inciso e) del artículo 103 del CNPT se constituye en una sanción impropia, en el tanto que, aun cuando se cumpla a destiempo o extemporáneamente el requisito de respaldar con registros bancarios los gastos pagados en efectivo, por un monto mayor a tres salarios base, siempre se mantiene la no deducibilidad del gasto, aplicando así dos sanciones diferentes por un mismo hecho, a saber: 1) la sanción impropia de no deducibilidad del gasto prevista en el inciso e) del artículo 103 del CNPT y 2) la sanción prevista por el artículo 81 de ese mismo cuerpo normativo. Alega que el artículo 42 constitucional establece la imposibilidad de imponer dos o más sanciones a un mismo sujeto por el mismo hecho. La infracción constitucional ocurre cuando se verifica la aplicación de más de una sanción en la misma vía, bajo una identidad del sujeto activo, de la conducta, del cuadro fáctico y del fundamento. Asevera que, en la especie, se infringe el citado principio en su componente material, por cuanto, el artículo impugnado establece que si el contribuyente no respalda sus gastos superiores a tres salarios base con registros bancarios emitidos en el momento de realización del pago –como sucede en el caso que un determinado gasto es pagado en dinero en efectivo–, se considera que el gasto no es deducible (sanción encubierta o impropia) y se mantiene la no deducibilidad, mientras que, simultáneamente, se sanciona al contribuyente con el pago de la multa prevista por el artículo

81 del CNPT, por haber deducido un gasto que la ley considera como no deducible en las circunstancias ya apuntadas. Ello conduce a que se imponga una doble sanción por una misma conducta, incluso si el contribuyente ha subsanado con posterioridad el incumplimiento inicial de no contar con un registro bancario que ampare o respalde el pago del gasto. Alega que resulta imposible reparar el incumplimiento inicial del contribuyente que en un primer momento paga un gasto en efectivo y, por ende, no cuenta con registro bancario de respaldo del gasto, para librarse así, por medio del cumplimiento o subsanación posterior, de la aplicación de la doble sanción. Aduce que el artículo 103, inciso e), del CNPT no prevé la posibilidad de subsanación posterior e impide entrar a valorar lo referente a la utilidad, necesidad y pertinencia (requisitos generales de la deducibilidad del gasto, conforme lo establecido por los artículos 7 y 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) de los gastos. Insiste que mantener el impedimento de la deducción del gasto, cuando se ha subsanado el incumplimiento inicial con posterioridad, convierte a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 103 del CNPT en una sanción impropia, que, cuando se aplica de manera conjunta con la multa del artículo 81 del CNPT, implica la imposición de una doble sanción. El accionante asevera que esta Sala ya se pronunció sobre las implicaciones de una sanción impropia en la normativa tributaria, que entraña doble punibilidad por el mismo hecho. Lo anterior, en la sentencia nro. 2012-16631, en que esta Sala se pronunció a favor de una interpretación conforme de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley nro. 7092 del Impuesto sobre la Renta, de forma que esta última disposición –que también contiene una sanción impropia– no terminara, por su aplicación conjunta con otras normas, infringiendo el principio de non bis in idem. Aduce que su representada se hace eco de lo ya resuelto por la Sala Constitucional en tal precedente, en el sentido que el cumplimiento posterior o extemporáneo del requisito de deducibilidad –que, en dicho caso, correspondía a la no retención del impuesto– es admisible a los efectos de que el contribuyente pueda recuperar el beneficio de la deducibilidad del gasto, con independencia de que en el momento inicial haya incumplido su obligación, porque lo que cuenta es que cumpla en un momento posterior y, además, teniendo en cuenta que dicho cumplimiento extemporáneo, con su consecuente posibilidad de recuperar la deducibilidad del gasto, se convierte en una vía válida para evitar la aplicación de dos sanciones al mismo hecho. Reclama, además, una infracción al principio de proporcionalidad. Refiere que en el derecho tributario, particularmente en lo que respecta al ámbito sancionatorio, el principio de proporcionalidad es determinante para evitar sanciones que resultan excesivas. Asimismo, la proporcionalidad es la base fundamental y rectora de los principios generales tutelados por el artículo 167 del CNPT. Señala que el artículo aquí impugnado vulnera el principio de proporcionalidad, por cuanto, la omisión de respaldar los gastos superiores a tres salarios base realizados en efectivo, con registros bancarios emitidos en el momento original de realización del pago, es doblemente sancionada con la no deducibilidad del gasto y con la sanción prevista en el apartado i) del sub inciso b) del inciso 1 del artículo 81 del CNPT. Sostiene que el rechazo del gasto necesariamente producirá que el importe autoliquidado por el sujeto pasivo sea distinto del determinado de oficio por la Administración Tributaria y, entonces, se incurra en una “inexactitud”, que el CNPT castiga en su numeral 81 con la imposición de una sanción de contenido pecuniario. Esa sanción se adiciona a la sanción impropia. La doble sanción se traduce en un doble efecto económico gravoso y exagerado. Alega que el inciso e) del artículo 103 del CNPT no habilita mecanismos para dilucidar hasta dónde la transacción realizada en efectivo resulta regular o irregular. Sostiene que negar la posibilidad de que el sujeto pasivo subsane su incumplimiento inicial de realizar una transacción bancaria y de contar con el respaldo bancario, se aleja del interés público tutelado, que es la protección del adecuado control tributario, que se protege mediante la

exigencia de contar –sea a tiempo o a destiempo– de un registro bancario que respalde el gasto. Argumenta que el rechazo del beneficio de la deducibilidad deviene en desproporcionado, en el tanto, el legislador ya había previsto la inexactitud de la declaración autoliquidada, con la aplicación de la multa del artículo 81 del CNPT. Sobre el tema de la proporcionalidad, aduce que esta Sala Constitucional ha reconocido, en su jurisprudencia, la necesidad de valorar los elementos propios de cada caso para determinar la forma de aplicar la norma. En el caso del artículo 103, inciso e), del CNPT, al realizarse una interpretación teleológica, se concluye que su finalidad es la posibilidad de comprobar y controlar la efectiva realización de los gastos e incluso combatir la legitimación de capitales. Al analizarse esa norma a la luz del caso concreto, debe considerarse que el negocio de su representada es la fabricación de productos cárnicos, por lo que su giro comercial incluye comprar ganado y debe tenerse presente que es común hacer pagos en efectivo a los proveedores. En cuyo caso, siempre que el contribuyente pueda probar la realización y pertinencia de tales gastos y que, además, pueda corregir la inicial inexistencia de respaldos bancarios, se eliminará la lesión del bien jurídico tutelado, por lo que mantener, de manera inalterable e ilógica, el rechazo de la deducibilidad de los gastos inicialmente pagados en efectivo, aún y cuando se haya subsanado posteriormente el incumplimiento, deviene en un despliegue desmedido de la potestad sancionatoria del Estado, al perderse de vista cuál es la ratio legis de la exigencia del requisito de contar con un respaldo bancario de la transacción. No debe olvidarse que la norma no busca imponer una sanción, por el mero hecho de imponer una sanción, sino que lo que se pretende es sancionar a aquel sujeto que ha lesionado el bien jurídico. Por lo que mantener, de forma inalterable y rígida, el rechazo de la deducibilidad de los gastos inicialmente pagados en efectivo, pero que luego se bancarizan, y permitir, además, que ese rechazo a la deducibilidad del gasto se aplique conjuntamente con la multa del artículo 81 del CNPT, se constituye en una situación desproporcionada, porque se incide doblemente en la esfera económica del contribuyente y, por esa razón, esa situación se torna en una inconstitucionalidad flagrante, por transgresión del principio de proporcionalidad. Solicita que se declare con lugar la acción y se disponga una interpretación conforme con la Constitución Política del artículo 103, inciso e), del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el sentido que se admita la deducibilidad del gasto realizado en efectivo, aun cuando el respaldo de la transacción bancaria se realice en un momento posterior, a través de registro bancario, de forma que no constituya una sanción impropia violatoria del principio de non bis in idem y del principio de proporcionalidad. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues tiene como asunto base un procedimiento administrativo en fase de agotamiento de la vía, que se tramita ante el Tribunal Fiscal Administrativo (expediente nro. AT-SF-PD-14-2021), en el que se invocó la inconstitucionalidad del artículo 103, inciso e), del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en relación con la pretensión de aplicación conjunta de esa norma, con la sanción prevista en el artículo 81 de ese mismo código (traslado de cargos sancionador nro. ATZS-SF-PS-14-2021-14-5135-03). Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: Se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que disponen lo siguiente “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del

asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”, “Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-SC@poderjudicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Notifíquese./Fernando Castillo Víquez, presidente. ».-

San José, 24 de julio del 2024.

**Angie Pamela Solano Cajlleja**

Secretaria a.i.

Referencia N°: 2024128896, publicación número: 1 de 3

### **AVISO CONSTITUCIONAL 3V**

Publicar TRES VECES CONSECUTIVAS en el Boletín Judicial, tal y como lo establece el artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional “De conformidad con lo establecido en el oficio No. 2239-DE-2024 de 27 de junio de 2024 de la Dirección Ejecutiva, que establece que las publicaciones remitidas por la Sala Constitucional por medio del Sistema de Boletín Judicial (SIBO), se tramiten con las consideraciones expuestas en el oficio No. PSC-038-2024 del 25 de junio de 2024 de la Presidencia de la Sala Constitucional”

**SALA CONSTITUCIONAL**

**ASUNTO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA**

Hace saber:

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD que se tramita con el número 24-010117-0007-CO promovida por contra EL ARTÍCULO 8 PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, por estimarlo contrario a los principios de legalidad, igualdad, razonabilidad, proporcionalidad, austeridad y eficiencia en el uso de los fondos públicos, de conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política, se ha dictado el voto número 2024-018687 de las nueve horas veinte minutos del tres de julio de dos mil veinticuatro, que literalmente dice:

«Se declara sin lugar la acción.-»

San José, 22 de julio del 2024.

**Angie Solano C.**

Secretaria a.i.

Referencia N°: 2024128552, publicación número: 3 de 3

Publicar TRES VECES CONSECUTIVAS en el Boletín Judicial, tal y como lo establece el artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional “De conformidad con lo establecido en el oficio No. 2239-DE-2024 de 27 de junio de 2024 de la Dirección Ejecutiva, que establece que las publicaciones remitidas por la Sala Constitucional por medio del Sistema de Boletín Judicial (SIBO), se tramiten con las consideraciones expuestas en el oficio No. PSC-038-2024 del 25 de junio de 2024 de la Presidencia de la Sala Constitucional”

**SALA CONSTITUCIONAL**

**ASUNTO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA**

Hace saber:

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD que se tramita con el número 24-008292-0007-CO promovida por contra el Artículo 7 de la Resolución DG-091-2013 de las 13:18 horas del 04 de julio de 2013 de la Dirección General del Servicio Civil, por estimarlo contrario a lo dispuesto en los artículos 33, 39, 40, 42 y 56 de la Constitución Política y los artículos 1, 5.2, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha dictado el voto número 2024-019472 de las nueve horas veinte minutos del diez de julio de dos mil veinticuatro, que literalmente dice:

«Se declara SIN lugar la acción.»

San José, 22 de julio del 2024.

**Angie Solano C.**

Secretaria a.i.

Referencia N°: 2024128549, publicación número: 3 de 3

Publicar TRES VECES CONSECUTIVAS en el Boletín Judicial, tal y como lo establece el artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional “De conformidad con lo establecido en el oficio No. 2239-DE-2024 de 27 de junio de 2024 de la Dirección Ejecutiva, que establece que las publicaciones remitidas por la Sala Constitucional por medio del Sistema de Boletín Judicial (SIBO), se tramiten con las consideraciones expuestas en el oficio No. PSC-038-2024 del 25 de junio de 2024 de la Presidencia de la Sala Constitucional”

### **SALA CONSTITUCIONAL**

#### **ASUNTO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA**

Hace saber:

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD que se tramita con el número 23-030045-0007-CO promovida por ALCALDE MUNICIPAL DE VASQUEZ DE CORONADO, ROLANDO MENDEZ SOTO contra el artículo 30 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, por estimarla contraria a los artículos 33 y 63 de la Constitución Política así como los principios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad., se ha dictado el voto número 2024-018683 de las nueve horas veinte minutos del tres de julio de dos mil veinticuatro, que literalmente dice:

«Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula el numeral 30 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Este voto tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese esta resolución a la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo. Notifíquese esta sentencia a la Procuraduría General de la República y las partes apersonadas.»

Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto.

San José, 22 de julio del 2024.

**Angie Solano C.**

Secretaria a.i.

Referencia N°: 2024128547, publicación número: 3 de 3

Publicar TRES VECES CONSECUTIVAS en el Boletín Judicial, tal y como lo establece el artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional “De conformidad con lo establecido en el oficio No.2239-DE-2024 de 27 de junio de 2024 de la Dirección Ejecutiva, que establece que las publicaciones remitidas por la Sala Constitucional por medio del Sistema de Boletín Judicial (SIBO), se tramiten con las consideraciones expuestas en el oficio No. PSC-038-2024 del 25 de junio de 2024 de la Presidencia de la Sala Constitucional”

### **SALA CONSTITUCIONAL**

**ASUNTO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA**

Hace saber:

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD que se tramita con el número 22-027434-0007-CO promovida por contra el artículo 112, inciso i), del Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, aprobado por la Junta Directiva del INDER en el artículo 3 de la sesión extraordinaria 014-2010 celebrada el 19 de abril de 2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.º 116 del 16 de junio de 2010, por estimarlo contrario al debido proceso (artículos 39 y 41 de la Constitución Política), al principio de transparencia y al principio de seguridad jurídica, se ha dictado el voto número 2024-018680 de las nueve horas veinte minutos del tres de julio de dos mil veinticuatro, que literalmente dice:

«Se declara SIN LUGAR la acción.»

San José, 22 de julio del 2024.

**Angie Solano C.**

Secretaria a.i.

Referencia N°: 2024128546, publicación número: 3 de 3

Publicar TRES VECES CONSECUTIVAS en el Boletín Judicial, tal y como lo establece el artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional “De conformidad con lo establecido en el oficio No. 2239-DE-2024 de 27 de junio de 2024 de la Dirección Ejecutiva, que establece que las publicaciones remitidas por la Sala Constitucional por medio del Sistema de Boletín Judicial (SIBO), se tramiten con las consideraciones expuestas en el oficio No. PSC-038-2024 del 25 de junio de 2024 de la Presidencia de la Sala Constitucional”

**SALA CONSTITUCIONAL**

**ASUNTO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA**

Hace saber:

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD que se tramita con el número 21-009273-0007-CO promovida por ASOCIACION DE PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANZA, JOSE MARIA VILLALTA FLOREZ ESTRADA, ZARAY ESQUIVEL MOLINA contra la norma de ejecución presupuestaria en el artículo 7, inciso 12) de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2020, Ley No. 9791, reformada por el artículo 6 de la Ley No. 9879 de 28 de julio de 2020 por estimarlo contrario a los artículos 177, 180 y 192 de la Constitución Política, se ha dictado el voto número 2024-019539 de las once horas cuarenta minutos del diez de julio de dos mil veinticuatro, que literalmente dice:

«Se declara con lugar la acción; y, en consecuencia, se declaran inconstitucionales los artículos 7, inciso 12, de la “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el

Ejercicio Económico del 2020”, N° 9791 de 26 de noviembre de 2019, así como la reforma efectuada mediante el artículo 6, de la Ley N° 9879, de 28 de julio de 2020, del “Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2020 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020”, en virtud de los efectos que esas normas produjeron mientras estuvieron vigentes, concretamente en lo que al Ministerio de Educación Pública se refiere. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas consolidadas. Comuníquese al Presidente del Poder Legislativo. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta.-»

Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto.

San José, 22 de julio del 2024.

**Angie Solano C.**

Secretaria a.i.

Referencia N°: 2024128544, publicación número: 3 de 3